

# **EXHIBIT 6**



Fiscalía General de la República

ACUERDO DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN

Célula de Investigación:	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN B-IV
Carpeta de Investigación:	FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021
Fecha:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
Hora:	21:21

CIUDAD DE MEXICO 14 DE DICIEMBRE DE 2022, la suscrita Maestra Blanca Flor Ramón Peralta, Agente del Ministerio Público de la Federación acuerda:

Visto el estado que guarda la carpeta de investigación **FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021**. Y derivado del escrito registrado en esta Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la corrupción, signado por el licenciado **JOSE ARTURO CERON VARGAS**, Director de Asuntos CONTECIOSOS (Chief Litigation Affairs Officer de la Empresa Filial, de la Comisión Federal de Electricidad Denominada **CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI)**, de fecha 14 de diciembre de 2022, recibido en Oficialía de partes de estas Fiscalía Federal, mediante el cual solicita:

*“...Que, por medio del presente y con fundamento en los artículos 8 y 20, Apartado C, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 109, fracciones II, V, XIV, XV y XVII; 127, 131, fracciones V y IX; 356, 357, 358 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Artículo 40, fracciones XI, inciso b, VI, XVIII y XIX de la Ley de la Fiscalía General de la República, vengo a solicitar de manera pacífica y respetuosa que se me informe lo siguiente:*

- 1. El estado procesal que guarda la carpeta de investigación identificada bajo el número 513/2021, en la que CFE International, LLC tiene el carácter de víctima.*
- 2. El estado procesal que guarda la causa penal identificada bajo el número 21/2022, en la que CFE International, LLC es víctima u ofendido.*
- 3. Los posibles alcances de la resolución que emita el Juez de Control en la Audiencia Inicial de la causa penal identificada bajo el número 21/2022.*
- 4. En caso de que CFEi obtuviera datos de prueba, de manera lícita a través de procedimientos jurídicos en el extranjero, el Ministerio Público Federal, titular de la Carpeta de Investigación identificada bajo el número 513/2021, estaría en posibilidad jurídica de recibir dichos datos de prueba.*

En ese sentido, se hace del conocimiento del Lic. JOSE ARTURO CERON VARGAS, Director de Asuntos Contenciosos (Chief Litigation Affairs Officer de la



Empresa Filial de la Comisión Federal de Electricidad Denominada CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI), que esta fiscalía federal acuerda lo siguiente:

**PRIMERO.** La suscrita Agente del Ministerio Público de la Federación es competente para emitir este acuerdo con fundamento en los artículos 8, 16, 21 primer párrafo y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracciones I, XXIII y XXIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 fracción VI, 12, 13 V, 39, 40 y demás relativos y aplicables de la ley de la Fiscalía General de la República; 51 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo A/003/2019 por el que se instaló la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Lineamientos Primero, Segundo, fracción XV, Sexagésimo Cuarto, fracción I, incisos h), j), o) y p) de los Lineamientos L/003/19, por los que se regula al personal adscrito a la entonces Procuraduría General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal de transición.

**SEGUNDO.** El artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

*“[...]*

*C. De los derechos de la víctima o del ofendido:*

*I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;*

*[...]”*

En similares términos, la fracción V, del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé:

*“[...]*

*Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:*

*V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;*

*[...]”*

Como se aprecia, tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el derecho de la víctima a ser informado del desarrollo del procedimiento penal; consecuentemente si CFE International, tiene la calidad de parte ofendida en la carpeta de investigación en que se actúa, es evidente que se surte a su favor el derecho a ser informado del desarrollo del procedimiento penal y por ende a que se atiendan los cuestionamientos planteados:





Ahora bien en lo que respecta al numeral “1”, a través del cual solicita de manera textual:

- 1. El estado procesal que guarda la carpeta de investigación identificada bajo el número 513/2021, en la que CFE International, LLC tiene el carácter de víctima.**

Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; al respecto, se informa a usted, que esta fiscalía federal con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 52, 307, 310, 311, 313, 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en fecha tres de febrero del dos mil veintidós, determinó el ejercer acción penal en contra de los investigados, toda vez que advierte que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que los imputados lo hayan cometido o participado en su comisión, solicitándose audiencia de formulación de imputación contra **Javier Gutierrez Becerril y Jose Guadalupe Valdez García**, por el delito de **Uso indebido de atribuciones y facultades** previsto en el artículo 217, fracción I, inciso d) del Código Penal Federal, en la modalidad del servidor público que indebidamente contrate la adquisición de servicios con recursos económicos públicos, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2, fracción I, primer párrafo del Código Penal Federal; ante el Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur; lo que originó la causa penal con el número **21/2022**.

No obstante la audiencia inicial ha sido diferida o suspendida en tres ocasiones, en los siguientes términos:

- a. Se fijó originalmente el **23 de mayo de 2022**, para celebrar audiencia inicial; la cual se inició; sin embargo, los defensores de los justiciables manifestaron que no existían las condiciones para llevarse a cabo la audiencia, ya que no se encontraban impuestos del contenido total de los diversos datos de prueba que integraban la presente carpeta de investigación. Luego entonces, consideró el Juez diferir la audiencia.
- b. Se señaló nuevamente fecha para celebrar audiencia el **17 de agosto de 2022**, la cual se inició, pero los defensores de los justiciables manifestaron que solicitarían diversos datos de prueba a la Fiscalía Federal, los cuales eran indispensables para su teoría del caso. Igualmente, consideró el diferimiento de la audiencia.
- c. Es el caso que se notificó un acuerdo en que señaló el **26 de octubre de 2022**, para celebrar la audiencia inicial; sin embargo, dos días antes de la celebración de esta, de nueva cuenta **se notificó su suspensión**, derivado del estado de salud del justiciable **Javier Gutierrez Becerril**, que lo imposibilitaba para presentarse a la audiencia señalada de acuerdo con lo manifestado por su



defensa.

- d. El **24 de noviembre de 2022**, se recibió notificación por parte del Centro de Justicia Penal Federal, a través del cual se da vista esta Fiscalía Federal, para que en el plazo de cinco días hábiles, se pronunciara respecto de la solicitud del justiciable **Javier Gutierrez Becerril**, en la cual solicita que la audiencia inicial que se fije sea a través del sistema de videoconferencia.

Sin que hasta la fecha se haya fijado audiencia inicial.

En lo que atañe a lo concerniente en la solicitud del profesionista en el numeral “2”, que a la letra dice:

***2. El estado procesal que guarda la causa penal identificada bajo el número 21/2022, en la que CFE International, LLC es víctima u ofendido.***

Se le informa, que con la finalidad de obviar repeticiones innecesarias, que el mismo ya ha quedado dirimido en el punto anterior.

Por lo que respecta al numeral marcado como “3”, a través del cual solicita de manera textual:

***3. Los posibles alcances de la resolución que emita el Juez de Control en la Audiencia Inicial de la causa penal identificada bajo el número 21/2022.***

En ese contexto, se advierte en líneas anteriores, que esta Fiscalía Federal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 52, 307, 310, 311, 313, 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determinó ejercer acción penal en contra de los investigados **Javier Gutierrez Becerril y Jose Guadalupe Valdez García**, por el hecho que la ley señala como delito de **Uso indebido de atribuciones y facultades** que se encuentra previsto en el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, toda vez que la teoría del caso de la fiscalía considera, que existen datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos que establecen razonablemente que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que los imputados lo hayan cometido o participado en su comisión, en su calidad como servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales indebidamente contrataron la adquisición de servicios con recursos económicos públicos, ya que no se cumplieron con las exigencias previstas en los numerales 134 párrafos tercero y cuarto de la CPEUM, pues no se aseguraron al Estado Mexicano las mejores condiciones.

Motivo por lo cual se solicitó audiencia inicial para formular imputación a los justiciables, en presencia del Juez de control, y se le hagan saber conforme a lo ordenado en el numeral 311 de la ley adjetiva de la materia, la investigación incoada en su contra, así como el hecho que se les atribuye, la clasificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y





modo de su comisión, la forma de intervención y el nombre de su acusador; formulada la imputación esta representante social solicitará al juez de la causa, la oportunidad para motivar y solicitar la vinculación de los imputados a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con lo que se considera se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que lo cometieron; una vez concluida esta etapa, el juez de la causa procederá a resolver conforme a los requisitos establecidos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que considere que existen indicios razonables que permitan suponer la teoría del caso de la Fiscalía, y establezca que no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, en su caso, dictará un auto de vinculación a proceso; posteriormente se procederá a solicitar las medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales durarán el tiempo que dure el proceso, con la finalidad de asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, y no exista peligro de sustracción de los mismos; y por último, la Fiscalía requerirá con fundamento en el artículo 321 del ordenamiento legal en cita, un plazo pertinente para el cierre de la investigación complementaria, para formular la acusación y una mejor preparación del caso.

Por último del escrito de cuenta, el impetrante reza en el numeral "4", lo siguiente:

- 4. En caso de que CFEi obtuviera datos de prueba, de manera lícita a través de procedimientos jurídicos en el extranjero, el Ministerio Público Federal, titular de la Carpeta de Investigación identificada bajo el número 513/2021, estaría en posibilidad jurídica de recibir dichos datos de prueba.**

Del numeral anterior, con fundamente en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 109, fracción XIV, XV, y XVII, 127, 131, fracciones V y IX; 356, 357, 358 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y artículo 40 fracciones XVI, XVIII y XIX de la Ley de la Fiscalía General de la República, se le dice al peticionante que el Ministerio Público se encuentra jurídicamente facultado para para recabar indicios y medios de prueba que sean útiles y pertinentes para construir su teoría del caso.

Sirve de apoyo jurisprudencial con numero de registro digital: **2023692, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias: Penal, Tesis: I.9o.P.8 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3501**

**ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FACULTAD DE LAS PARTES DE PROPONER AL MINISTERIO PÚBLICO QUE REALICE LOS QUE CONSIDERAN PERTINENTES Y ÚTILES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTÁ LIMITADA A UNA EVALUACIÓN BAJO EL CRITERIO DE RELEVANCIA PROBATORIA (CONDUCENCIA), PARA ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE DICHA AUTORIDAD DE EJECUTARLOS.**

*Hechos: El quejoso, a quien se le relaciona con la integración de una carpeta de investigación por un hecho con apariencia de delito, solicitó al Ministerio Público que se citara a diversos testigos para que rindieran su entrevista y se integrara ese dato de prueba*





*a los antecedentes de la indagatoria; la autoridad investigadora negó la realización de esas diligencias, pues consideró que no eran conducentes para acreditar el ilícito.*

*Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a las partes para proponer al Ministerio Público la realización de actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, lo cierto es que dicha facultad no es absoluta; por el contrario, se encuentra limitada a una evaluación bajo el criterio de relevancia probatoria (conducencia), pues dicha pauta permitirá establecer —o no— la obligación, a cargo de la autoridad ministerial, de ejecutar los actos de investigación solicitados por las partes.*

*Justificación: En la doctrina, específicamente haciendo referencia a trabajos elaborados por el jurista Michele Taruffo, los criterios de relevancia permiten identificar la relación (o nexo) que un acto de investigación puede —o no— tener con el supuesto de hecho previsto en la norma que pretende acreditarse. De este modo, un acto de investigación sólo es conducente si selecciona las connotaciones del hecho que resultan importantes para actualizar la aplicación de la norma jurídica que es materia de la litis procesal (en este caso, de la investigación). Por otra parte, haciendo uso del derecho comparado, un posicionamiento que resulta esclarecedor para la postura que se sostiene es el emitido por el Tribunal Constitucional Peruano el cual, en esencia, refirió que en un Estado constitucional (como el Mexicano) no deben tolerarse pesquisas e indagaciones indeterminadas o sin hechos precisos; por esa razón, los fiscales tienen la obligación de evitar realizar actos de investigación al azar, tendenciosos o innecesarios para la integración de la indagatoria y, en consecuencia, la solicitud de incorporar determinado dato de prueba a los antecedentes ministeriales debe someterse a un escrutinio probatorio como el descrito.*

Así mismo, cabe destacar que uno de los aspectos de mayor impacto y trascendencia en el sistema procesal penal acusatorio mexicano es la prueba como tema central en el proceso, regulada bajo los principios de la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, así como la trascendencia de la delimitación de su objeto, función y tema, la distinción de los datos, los medios y la prueba en sí misma. Con base al **principio de libertad probatoria**, la prueba debe ser obtenida libremente, pero siempre de manera legal, pues de no ser así será deslegitimizada la total independencia e imparcialidad del juzgador, a quien le corresponde decidir con base en las pruebas aportadas en un plano de paridad, sobre la base de la presunción de inocencia del imputado, el respeto a los derechos fundamentales y la exclusión de la prueba ilícita como soporte de un nuevo paradigma en el sistema procesal.

Por lo tanto esta Fiscalía Federal en el presente asunto, se encuentra en etapa de investigación inicial, recabando datos de prueba, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de los imputados; así conforme a lo dispuesto en el artículo 262, del Código Adjetivo de la materia, las partes tendrán el derecho de ofrecer cualquier medio de prueba testimonial, pericial documental y/o material, para sostener sus planteamientos en términos establecidos en la normatividad; siempre y cuando estas sean obtenidas lícitamente, las cuales serán admitidas y desahogadas en el proceso en los términos que establece la ley. Por lo anterior, esta Representación Social de la Federación:

## A C U E R D A

---

<sup>1</sup> **Artículo 263.** *Licitud probatoria.*

*Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este código.*



**PRIMERO.** Por los fundamentos y motivos expuestos se acuerda favorable la solicitud del licenciado **JOSE ARTURO CERON VARGAS**, Director de Asuntos CONTECIOSOS (Chief Litigation Affairs Officer de la Empresa Filial de la Comisión Federal de Electricidad Denominada CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI), mediante el cual solicita diversa información en la carpeta de investigación **FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021**.

**SEGUNDO.** Se ordena correr traslado del escrito de fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, suscrito por el licenciado **JOSE ARTURO CERON VARGAS**, Director de Asuntos CONTECIOSOS (Chief Litigation Affairs Officer de la Empresa Filial de la Comisión Federal de Electricidad Denominada **CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI)**, a las partes, así como a los investigados y defensores particulares, en formato PDF para su conocimiento.

**TERCERO.** Notifíquese a todos los intervinientes en la presente carpeta, de acuerdo que antecede, de conformidad con las disposiciones del Capítulo V, del Título IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

**LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN FUNCIONES DE FISCAL EN JEFE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN B-IV DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

**MTRA. BLANCA FLOR RAMÓN PERALTA**





## DECLARATION AND CERTIFICATION

I BRUCE TAYLOR declare that I am a CERTIFIED TRANSLATOR registered with the AMERICAN TRANSLATORS ASSOCIATION.

I am certified to translate from the SPANISH language to the ENGLISH language. My Certification Number is 503180.

I declare to the best of my abilities and belief that this is a true and accurate translation of the Spanish language text of:

2022.12.14 - FGR ACUERDO ACTOS DE INVESTIGACIÓN 513-2021

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.

This declaration signed this 16<sup>th</sup> day of December, 2022, in Los Angeles, California.

Signature of Certified Translator registered with the American Translators Association:



BRUCE TAYLOR

\* See attached document



Verify at [www.atanet.org/verify](http://www.atanet.org/verify)

*NOTE: The Certified Translator registered with the American Translators Association must be acknowledged by a notary public.*

**CALIFORNIA ACKNOWLEDGMENT**

CIVIL CODE § 1189

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California

County of

LOS ANGELES

On

DEC. 16. 2022

Date

before me,

LILLY TAHERI (Notary Public)

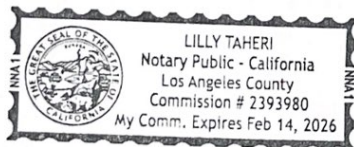
Here Insert Name and Title of the Officer

personally appeared

BRUCE TAYLOR

Name(s) of Signer(s)

who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.



I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

Signature of Notary Public

Place Notary Seal and/or Stamp Above

**OPTIONAL**

Completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

**Description of Attached Document**

Title or Type of Document:

DECLARATION AND CERTIFICATION

Document Date:

12. 16. 2022

Number of Pages:

(1)

Signer(s) Other Than Named Above:

N/A

**Capacity(ies) Claimed by Signer(s)**

Signer's Name:

BRUCE TAYLOR

Signer's Name:

☐ Corporate Officer – Title(s):☐ Corporate Officer – Title(s):☐ Partner – ☐ Limited ☐ General☐ Partner – ☐ Limited ☐ General☐ Individual☐ Attorney in Fact☐ Individual☐ Attorney in Fact☐ Trustee☐ Guardian or Conservator☐ Trustee☐ Guardian or Conservator☐ Other:☐ Other:

Signer is Representing:

Signer is Representing:



[national emblem]  
UNITED  
MEXICAN  
STATES

**FGR**  
FISCALÍA GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
[Office of the Attorney  
General of the Republic]

**Office of the Attorney General of the Republic**

#### DECISION ON INVESTIGATIVE ACTIVITIES

Investigative Division:	<b>B-IV INVESTIGATION AND LITIGATION TEAM</b>
Investigative File:	<b>FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021</b>
Date:	DECEMBER 14, 2022
Time:	9:21 P.M.

MEXICO CITY, DECEMBER 14, 2022. I the undersigned, Ms. Blanca Flor Ramón Peralta, Agent of the Public Prosecutor's Office of the Federation, hereby decide as follows:

Having regard to the condition of investigative file **FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021**, and in consequence of the document registered with this Specialized Public Prosecutor's Office on Anti-Corruption [FEMCC] signed by Mr. **JOSE ARTURO CERON VARGAS** (Atty.), Director de Asuntos CONTENCIOSOS (Chief Litigation Affairs Officer) of the Affiliated Company of the Comisión Federal de Electricidad [Federal Electricity Commission] known as **CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI)**, dated December 14, 2022, received at the Filing Clerk's Office of this Federal Public Prosecutor's Office, by means of which the following is requested:

*"... Whereas, by these presents and pursuant to the provisions set forth in articles 8 and 20, Title C, sections I and II of the Political Constitution of the United Mexican States; Article 109, sections II, V, XIV, XV and XVII; Articles 127, 131, sections V and IX; articles 356, 357, 358 and 359 of the National Code of Criminal Procedure; Article 40, sections XI, point b, sections VI, XVIII and XIX of the Ley de la Fiscalía General de la República [Law on the Office of the Attorney General of the Republic], I come before you peacefully and respectfully to request that I be informed of the following:*

- 1. The procedural status of the investigative file identified under number 513/2021, in which CFE International, LLC has the status of victim.*
- 2. The procedural status of the criminal case identified under number 21/2022, in which CFE International, LLC is the victim or injured party.*
- 3. The possible scope of the order issued by the Supervisory Judge in the Preliminary Hearing of the criminal case identified under number 21/2022.*
- 4. Should CFEl obtain evidentiary material lawfully via legal proceedings abroad, whether the Federal Public Prosecutor's Office in charge of the Investigative File identified under number 513/2021 would be legally able to receive the aforementioned evidentiary material.*

Accordingly, Mr. JOSE ARTURO CERON VARGAS (Atty.), Chief Litigation Affairs Officer of  
the

[barcode]

Affiliated Company of the Federal Electricity Commission known as CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI), is hereby informed that this Federal Public Prosecutor's Office issues the following decision:

**ONE.** The undersigned Agent of the Public Prosecutor's Office of the Federation is competent to issue this decision pursuant to articles 8, 16, 21 first paragraph and article 102 of Title A of the Political Constitution of the United Mexican States; article 131 of sections I, XXIII and XXIV of the National Code of Criminal Procedure; articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 of section VI, articles 12, 13 of section V, articles 39, 40 and such other related and applicable provisions of the Law on the Office of the Attorney General of the Republic; article 51, section I, point a) of the Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación [Organic Law on the Judicial Branch of the Federation]; Decision A/003/2019 by which the Specialized Public Prosecutor's Office on Anti-Corruption was established; Guidelines One, Two, section XV, item Sixty-Four, section I, points h), j), o) and p) of Guidelines L/003/19, by which the personnel assigned to the then Office of the Procurator General of the Republic, now the Office of the Attorney General of the Republic, as well as transition staff, are regulated.

**TWO.** Article 20, title C, section I, of the Political Constitution of the United Mexican States provides as follows:

*"[...]"*

*C. On the rights of the victim or the injured party:*

*I. To receive legal advice; to be informed of the rights established in their favor in the Constitution and, on request, to be informed of the status of the criminal proceeding;*

*"[...]"*

Similarly, section V of article 109 of the National Code of Criminal Procedure provides as follows:

*"[...]"*

*Article 109. Rights of the victim or the injured party. The victim or injured party shall have the following rights in the proceedings provided for in this Code:*

*V. To be informed, on request, of the status of the criminal proceeding by their Legal Advisor, the Public Prosecutor's Office and/or, as applicable, by the Judge or the Court;*

*"[...]"*

As can be seen, both the Constitution and the National Code of Criminal Procedure provide for the right of the victim to be informed of the development of the criminal proceeding; consequently, if CFE International has the status of injured party in the investigative file in question, it is clear that it has a right to be informed on the development of the criminal proceeding and therefore for the questions presented to be addressed:

[barcode]



Now, with respect to item “1”, in which the following request is literally made:

***1. The procedural status of the investigative file identified under number 513/2021, in which CFE International, LLC has the status of victim.***

In view of the foregoing, pursuant to articles 20, title C, section I, of the Political Constitution of the United Mexican States, 109, section V, of the National Code of Criminal Procedure; with respect to this, you are hereby informed that pursuant to the provisions set forth in articles 4, 52, 307, 310, 311, 313, 316, of the National Code of Criminal Procedure, on February third, two thousand twenty-two, this Federal Public Prosecutor’s Office decided to pursue criminal action against the parties under investigation, since it notes that the investigative file contains information establishing that an act has been committed stipulated in law as a crime and that the probability exists that the accused have committed or participated in the commission thereof, requesting an arraignment hearing against **Javier Gutiérrez Becerril and José Guadalupe Valdez García** for the crime of **Inappropriate use of powers and faculties** provided for in article 217, section I, point d) of the Federal Criminal Code, in the form of a public official who inappropriately contracted the acquisition of services using public funds, pursuant to the provisions set forth in item 2, section I, first paragraph of the Federal Criminal Code; before the Supervisory Judge at the Centro de Justicia Penal Federal [Federal Criminal Justice Center] in Mexico City, sitting in the Reclusorio Sur [Southern Penitentiary], which provided the basis for the criminal case under number **21/2022**.

The above notwithstanding the fact that the preliminary hearing has been deferred or adjourned on three occasions, as follows:

- a. The preliminary hearing was originally set to be held for **May 23, 2022**; this [hearing] commenced, but the defendants’ counsel declared that the conditions did not exist for the hearing to be carried out since they were not in possession of the entire contents of the various items of evidence of which the present investigative file is composed. Consequently, the Judge decided to adjourn the hearing.
- b. A new date was set for the hearing to be held on **August 17, 2022**, which commenced, but the defendants’ counsel declared that they were requesting various items of evidence from the Federal Public Prosecutor’s Office, which were indispensable to their argument in the case. Once again, it was decided to adjourn the hearing.
- c. It is on record that a notification was issued of a decision ordering the preliminary hearing to be rescheduled to **October 26, 2022**; however, two days before it was due to be held a **notification of adjournment was again issued** due to the health status of the defendant **Javier Gutiérrez Becerril** such as would make it impossible for him to appear at the aforementioned hearing based on the statement made by his

[barcode]

defense.

- d. On **November 24, 2022**, notification was received from the Federal Criminal Justice Center, by means of which this Federal Public Prosecutor's Office was notified to issue a decision within the period of five working days with respect to the application of the defendant **Javier Gutiérrez Becerril**, in which he requested that the preliminary hearing to be set be held via the videoconferencing system.

To date no preliminary hearing has been rescheduled.

In regards to the matter relating to item "2" in the application made by the attorney, which literally states as follows:

2. *The procedural status of the criminal case identified under number 21/2022, in which CFE International, LLC is the victim or injured party.*

You are hereby informed that, in order to avoid unnecessary repetition, this has already been addressed in the preceding point.

With respect to the item marked as "3", which literally states as follows:

3. *The possible scope of the decision issued by the Supervisory Judge in the Preliminary Hearing of the criminal case identified under number 21/2022.*

In this context, information is provided above to the effect that this Federal Public Prosecutor's Office, pursuant to the provisions set forth in articles 4, 52, 307, 310, 311, 313, 316, of the National Code of Criminal Procedure, decided to pursue criminal proceedings against the suspects **Javier Gutiérrez Becerril and José Guadalupe Valdez García** due to the fact that the law stipulates the **Inappropriate use of powers and faculties** to be a crime provided for in article 217, section I, point d), of the Federal Criminal Code, since the basis of the Public Prosecutor's case holds that there are sufficient items of pertinent and appropriate evidence to reasonably establish that an act has been committed classified in law as a crime and that the probability exists that the accused have committed or participated in the commission thereof, in their capacity as public officials of the Federal Electricity Commission, having inappropriately contracted the acquisition of services using public funds, since they failed to comply with the requirements set forth in item 134, paragraphs 3 and four of the CPEUM [Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos — Criminal Code of the United Mexican States], in having failed to ensure the best possible conditions for the Mexican Government.

It is for this reason that an initial hearing was requested in order to file charges against the defendants in the presence of the Supervisory Judge, and to inform them pursuant to the provisions set forth in item 311 of the law relevant to the matter of the investigation initiated against them, together with the acts attributed to them, the preliminary legal classification, the date, place and



method by which they were committed, the manner of the intervention and the name of their accuser; and the charge having been formulated, this Public Prosecutor's Office is required to request the judge hearing the case for an opportunity to state grounds for and request that the accused to be held in custody pending trial, submitting in the same hearing those items of evidence on the basis of which it is believed that the existence of an act classified in law as a crime and the probability of their having committed it has been established; once this stage has been completed, the judge hearing the case shall proceed to rule in accordance with the requirements set forth in item 316 of the National Code of Criminal Procedure, and once it is deemed that reasonable evidence exists such as to accept the basis of the Public Prosecutor's Case, and it is accepted that no ground exists for disqualification of the criminal action or exclusion of the crime, as applicable, he or she shall issue an order for the defendants to be held in custody pending trial; subsequently, steps shall be taken to request those precautionary measures provided for in article 155 of the National Code of Criminal Procedure, which shall remain in force during such time as the proceeding lasts, in order to ensure the presence of the accused in the proceeding, and so that there be no danger of them absconding; and finally, the Public Prosecutor's Office shall, pursuant to article 321 of the aforementioned legal corpus, require a specific term for completion of the complementary investigation in order to formulate the indictment and for optimal preparation of the case.

Finally, item "4" of the aforementioned petitioner's document reads as follows:

***4. Should CFEi obtain evidentiary material, lawfully via legal proceedings abroad, whether the Federal Public Prosecutor's Office in possession of the Investigative File identified under number 513/2021 would be legally able to receive the aforementioned evidentiary material.***

With respect to the preceding item, it can be seen that pursuant to article 20, title C, section II, of the Political Constitution of the United Mexican States, as well as article 109, section XIV, XV, and XVII, 127, 131, sections V and IX; articles 356, 357, 358 and 359 of the National Code of Criminal Procedure, and article 40, sections XVI, XVIII and XIX of the Law on the Office of the Attorney General of the Republic, the petitioner is informed that the Public Prosecutor's Office is legally empowered to gather such evidence as may be useful and pertinent for building the basis of its case.

Jurisdictional support for this is provided under the following electronic record number: **2023692, of the Supreme Court of Justice of the Nation, Instance: Collegiate Circuit Courts, Eleventh Series, Subjects: Criminal, Decision: I.9.P.8 P (11<sup>th</sup>) Source: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación** [Gazette of the Judicial Weekly of the Federation]. **Book 6, October 2021, Volume IV, page 3501**

***INVESTIGATIVE ACTS IN ADVERSARIAL CRIMINAL PROCEEDINGS. THE POWER OF THE PARTIES TO REQUEST THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE TO CARRY OUT THOSE ACTS IT DEEMS RELEVANT AND USEFUL TO CLARIFY THE FACTS, AS PROVIDED IN ARTICLE 216 OF THE NATIONAL CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, IS LIMITED TO EVALUATION UNDER THE CRITERION OF EVIDENTIARY RELEVANCE (APPROPRIATENESS), IN ORDER TO ESTABLISH THE OBLIGATION OF THAT AUTHORITY TO ENFORCE THEM.***

*Facts: The complainant, who is the subject of the composition of investigative case file for an act having the appearance of a crime, requested the Public Prosecutor's Office to summon various witnesses for cross-examination, and for that evidentiary information*

*to be added to the record of the investigation; the investigating authority refused to carry out these formalities since it regarded them as not being appropriate for evidencing the unlawful act.*

*Legal opinion: This Collegiate Circuit Court finds that although article 216 of the National Code of Criminal Procedure empowers the parties to request the Public Prosecutor's Office to carry out those investigative acts it deems pertinent and useful to clarify the facts, the truth is that the aforementioned power is not absolute; to the contrary, it is limited to an evaluation under the criterion of evidentiary relevance (appropriateness), since the aforementioned guideline would allow the obligation to be established — or otherwise — to carry out those investigative acts requested by the parties, under the responsibility of the prosecuting authority.*

*Justification: In the doctrine, and with specific reference to the works of the jurist Michele Taruffo, the criteria of relevance provides for the establishment of the relationship (or nexus) an investigative act may — or may not — have to an alleged fact as set forth in the regulation it is intended to demonstrate. Accordingly, an investigative act is only appropriate if those connotations of the act are selected that are relevant to giving substance to the application of the legal regulation that forms the subject of the procedural litigation (in this case the investigation). In addition, in making use of comparative law, one specific position that helps to clarify the posture being asserted is that issued by the Peruvian Constitutional Court which, in essence, stated that a Constitutional State (like that of Mexico) should not tolerate nonspecific inquiries and investigations or those lacking specific facts; for that reason prosecutors have the obligation to avoid engaging in investigative acts that are random, tendentious or unnecessary to the composition of the investigation, and consequently an application to incorporate a specific evidentiary item to the prosecutorial record of the case must be subject to evidentiary scrutiny of the type described above.*

In addition, it should be underscored that one of the most important and transcendental features of the Mexican adversarial criminal procedural system is that evidence forms the key element in the proceeding, governed under the principles of publication, contradiction, continuity and immediacy, together with the transcendence of the delimitation of its purpose, function and topic, distinction of data, media and the evidence itself. Based on the **principle of evidentiary freedom**, evidence must be obtained freely but always legally, since otherwise the full independence and impartiality of the judge would be delegitimized, who is responsible for adjudicating based on the evidence submitted in a context of parity, on the basis of the presumption of the innocence of the defendant, respect for fundamental rights and the exclusion of unlawful evidence as the basis for a new paradigm in the procedural system.

Consequently, this Public Prosecutor's Office finds itself in the preliminary investigative phase in the instant matter, being in the process of gathering items of appropriate and relevant evidence in order to reasonably establish the existence of a criminal act and the probable participation of the accused; in addition, pursuant to the provisions set forth in article 262 of the code relevant to the matter, the parties have the right to offer any witness testimony, expert documentary evidence and/or material to support their arguments in accordance with the terms set forth in law, so long as these are obtained lawfully, which evidence shall be admitted and examined during the proceeding as provided in law. In view of the foregoing, this Federal Public Prosecutor's Office:

### HEREBY DECIDES

---

<sup>1</sup> **Article 263.** *Evidentiary legality.*

*Information and evidence must be obtained, produced and reproduced lawfully, and must be admitted and examined during the proceeding in accordance with the provisions set forth in this code.*



**ONE.** That, on the aforementioned grounds and for the aforementioned reasons, the request made by Mr. **JOSE ARTURO CERON VARGAS** (Atty.), Chief Litigation Affairs Officer of the Affiliated Company of the Federal Electricity Commission known as CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI), by means of which he requests various information in the **FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000513/2021** investigative case file, is approved.

**TWO.** That a copy of the document dated December fourteenth, two thousand twenty-two, signed by Mr. **JOSE ARTURO CERON VARGAS** (Atty.), Chief Litigation Affairs Officer of the Affiliated Company of the Federal Electricity Commission known as **CFE INTERNATIONAL LLC (CFEI)**, be notified to the parties, as well as to those individuals subject to investigation and their private defenders, in PDF format for their information.

**THREE.** That all of the parties intervening in the present file be notified in accordance with the foregoing, pursuant to the provisions set forth in Chapter V of Title IV of the National Code of Criminal Procedure.

**THE AGENT OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE ACTING AS CHIEF PROSECUTOR  
OF THE B-IV INVESTIGATION AND LITIGATION TEAM OF THE SPECIALIZED PUBLIC  
PROSECUTOR'S OFFICE ON ANTI-CORRUPTION OF THE OFFICE OF THE ATTORNEY  
GENERAL OF THE REPUBLIC**

[signature]

**MS. BLANCA FLOR RAMÓN PERALTA**

[seal:]

[national emblem]

UNITED MEXICAN STATES

[stamp:]

**FEMCC**

SPECIALIZED PUBLIC  
PROSECUTOR'S OFFICE ON ANTI-  
CORRUPTION

[barcode]